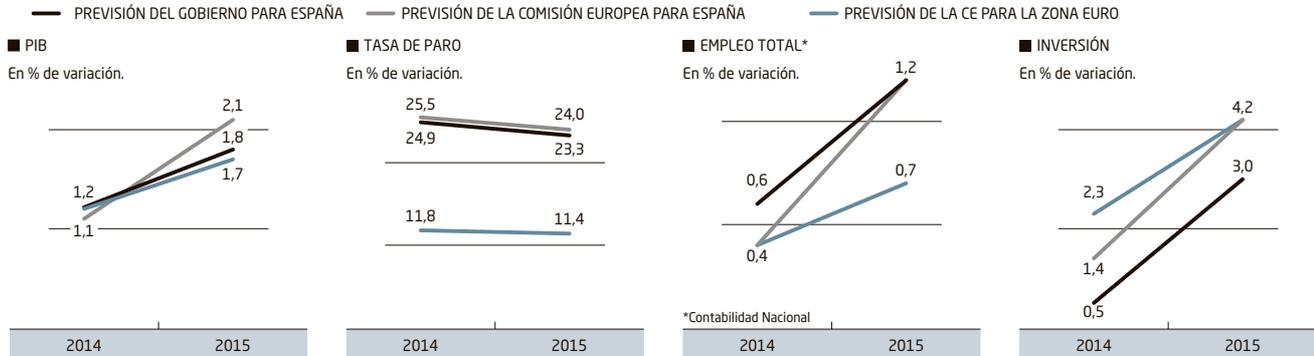


■ Últimas previsiones de la Comisión sobre la economía española



FUENTE: Gobierno de España y Comisión Europea.

EL MUNDO

Más ajustes para sostener el PIB

- Bruselas se alinea con el FMI y exigirá hoy a España que suba el IVA y baje las cotizaciones
- Advierte de que el déficit volverá a desbocarse en 2015 si no se aplican nuevas reformas

JAVIER G. GALLEGO / Bruselas
Corresponsal

La Comisión Europea está satisfecha con los progresos de la economía española pero al mismo tiempo reconoce que aún persisten desequilibrios macroeconómicos que ponen en riesgo la incipiente recuperación. El desempleo y el alto nivel de deuda, tanto pública como privada, son los dos factores que más preocupan en Bruselas y sobre los que hoy se pondrá especial énfasis cuando se presenten las nuevas recomendaciones económicas para España. El Ejecutivo comunitario reclamará al Gobierno una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral y un cambio en la presión fiscal para apuntalar el crecimiento y acelerar la creación de empleo.

Las propuestas a España tendrán más nivel de detalle porque Bruselas quiere estrechar la vigilancia sobre aquellos países que han salido de un programa de asistencia, al igual que ocurre con Irlanda y Portugal. Y porque el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad que envió el Gobierno a la Co-

misión Europea a finales de abril no detalla lo suficiente las medidas de ajuste que se llevarán a cabo en 2015 para evitar un nuevo repunte del déficit. Las últimas previsiones de la Comisión Europea ya advertían de que serán necesarias más acciones porque si no el desequilibrio presupuestario volverá a subir al 6,1% del PIB.

Bruselas apuesta por más recortes del gasto público frente a nuevas alzas tributarias y quiere que España reoriente su política fiscal hacia una mayor carga impositiva en los impuestos indirectos. En el último informe sobre política macroeconómica de España los técnicos del Ejecutivo comunitario proponían «un desplazamiento tributario» desde el trabajo al consumo y «otros impuestos como los medioambientales o gravámenes recurrentes sobre la propiedad». El Gobierno alega que no tiene mucho margen para actuar en el terreno de las cotizaciones sociales, pero la Comisión insiste en que una rebaja tendría una repercusión positiva en la evolución del PIB. Los cálculos

realizados sugieren que un recorte general de las cotizaciones de seis puntos, sumada a una subida del IVA de cuatro puntos, aceleraría la caída del paro y generaría un repunte adicional de la economía del 0,8% a partir del segundo año.

igual que las rígidas políticas activas de empleo y los mecanismos de reciclaje laboral entre los parados de la larga duración. Una de las recomendaciones será la de modernizar los sistemas públicos de empleo y acelerar la liberalización de servi-

plimiento del Pacto de Estabilidad –déficits por debajo del 3% y deuda pública inferior al 60% del PIB– sino también de asegurar que no existen desequilibrios macroeconómicos excesivos que ponen en riesgo la estabilidad del conjunto de la Unión. El último paso en este proceso de convergencia económica ha sido la revisión de los presupuestos nacionales: a la vuelta del verano la Comisión comprobará si el borrador elaborado por el Gobierno incluye las orientaciones que se van a dar hoy.

Fuentes de la Comisión responsables del seguimiento a los Estados miembros ponen a España como ejemplo de esta satisfactoria cooperación entre Bruselas y las capitales europeas. Aproximadamente un tercio de las recomendaciones se ha cumplido y otro tercio está siendo tramitado en estos momentos. «La Comisión no puede garantizar que se siguen todas las recomendaciones pero nuestro análisis de España es muy positivo, ha hecho un gran esfuerzo para aplicarlas», explican.

50.000 euros por el informe de la OCDE

> La OCDE cobró 50.000 euros por el informe sobre la reforma laboral que presentó en diciembre y realizó a petición del Gobierno. Elogió la medida, al considerar que promueve «la flexibilidad interna» y reduce «el coste de despido de los indefinidos».

> El Ejecutivo reveló el precio del informe tras una pregunta de la diputada socialista Pilar Lucío. La OCDE reclamó «profundizar» en aspectos como periodos de prueba más amplios en los contratos o reducir las indemnizaciones en grandes empresas.

Otras de las exigencias de la Comisión tendrá que ver con la reforma laboral. Los efectos positivos empiezan a notarse, según admiten en la Dirección General de Asuntos Económicos, pero la dualidad en el mercado sigue preocupando, al

mercado laboral gane dinamismo.

La vigilancia macroeconómica del Ejecutivo comunitario sobre los Estados miembros se ha intensificado desde el inicio de la crisis. Ya no se trata sólo de controlar el cum-



AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

Futuro político de las pensiones

José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fe-dea, acaba de publicar *¿Qué será de mi pensión?* (Ed. Península, 246 págs.), una obra donde intenta responder al dilema de cómo hacer sostenible un país lleno de jubilados a costa del Estado. Lo más notable de este trabajo de un economista es, paradójicamente, su descarnado análisis político. Las circuns-

tancias demográficas de España harán que el votante mediano, cuya edad estaba en 2010 en 47 años, se sitúe en 2050 en 62 años. Esto significa que la rentabilidad de la pensión pública para ese ciudadano será tan alta (deberá cotizar cuatro años y cobrará durante 22 años) que cualquier reforma será imposible.

En este escenario, a lo único que se puede aspirar es a reformas paramétricas, similares a la que puso en marcha Zapatero en 2011 sobre la edad de jubilación o la última comisión a la que perteneció el propio Conde-Ruiz.

El libro está lleno de datos valiosísimos. Conviene tener presente que, con el cambio en la esperanza de vida, los 65 años que se marcaron como edad de jubilación en la Alemania de Bismarck equivalen hoy a 89 años, que es la edad que está alcanzando el 35% de cada generación. Conde-Ruiz explica didácti-

camente cómo funciona el sistema español y las reformas a las que ha sido sometido, pero el capítulo clave es el que dedica al análisis de la solidaridad intergeneracional, donde prevé conflictos.

Pese a ello, el autor declara su fe en el sistema de reparto. De hecho al modelo chileno de capitalización lo despacha como si fuera una fruta exótica de dudoso gusto. Dice que «el mundo en el que vivimos está sujeto a mucha incertidumbre» como para confiarle nuestras pensiones al mercado, pese a que admite que los fondos chilenos en 34 años sólo han registrado rentabilidad negativa en dos ejercicios.

Para apoyar la idea de que el sistema de reparto es superior al de capitalización, Conde-Ruiz los compara por su rentabilidad. La del sistema de reparto, dice, es la rentabilidad ha-

bitual del capital, siempre amenazada «por la incertidumbre» de una crisis. Sin embargo, el famoso Thomas Piketty afirma lo contrario y sostiene que la rentabilidad del capital (r) es históricamente superior al crecimiento económico (g).

La rentabilidad del sistema de reparto, en cambio, depende del crecimiento de la población, del de la productividad de ésta y del número de jubilados. El mismo autor aporta muchos datos que llevan a la certeza –ya no a la incertidumbre– de que el sistema de reparto está condenado: hay menos población, los salarios son más bajos y cada vez hay más jubilados. Entonces, ¿dónde está la superioridad del reparto sobre el sistema de capitalización, en la incertidumbre o en la certidumbre?

johnmuller.es@gmail.com